

Bogotá, D.C., 04 de septiembre de 2024

Doctora

LIZ YADIRA MONROY DELGADO

Subsecretaria de Despacho

Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público

CONCEJO DE BOGOTÁ

Dirección: Calle 36 No. 28A-41

E-mail: comision_tercera@concejobogota.gov.co; correspondencia@concejobogota.gov.co

Ciudad

CONCEJO DE BOGOTÁ 05-09-2024 10:19:00

2024ER20394 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: EMPRE DE ETB DE BOGOTÁ/LAJRA CATALINA CARDONA CRUZ

DESTINO: SECRETARIA GENERAL/VIZCAINO SOLANO LUZ ANGELICA

ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION 1063 DE 2024

OBS: ---

Asunto: Respuesta a la Proposición 1063 de 2024 - Radicado No. 2024-EE-14279 O 1

Respetada Doctora Monroy,

En atención a la **Proposición No. 1063 de 2024**, presentada por los **Concejales de Bogotá GERMAN AUGUSTO GARCÍA MAYA y CLARA LUCÍA SANDOVAL MORENO** de la **Bancada del Partido Liberal Colombiano**, cuya temática corresponde a **“Rentabilidad y situación general de la Empresa de Teléfonos de Bogotá E.T.B”**, por delegación expresa y a nombre de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. (en adelante ETB), damos respuesta de acuerdo con la información suministrada por las áreas encargadas al interior de la empresa, iniciando por señalar que es nuestra disposición brindarla, siempre y cuando no se trate de una solicitud de información de carácter reservado y con el debido cuidado que como emisores de valores debemos tener, conforme a las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, así:

“1. Teniendo en cuenta que conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998 las empresas industriales y comerciales, así como las de servicios públicos domiciliarios conforman la rama del poder ejecutivo del estado y que de acuerdo con ello se entienden como parte de la administración municipal, informe a este concejo el valor de la rentabilidad que la empresa le ha de ha dejado al Distrito Capital desde el año 2010 hasta la fecha, discriminando año a año y señalando el destino de los recursos”.

Respuesta:

Se relaciona a continuación cuadro con los resultados, utilidad (pérdida), de cada año solicitado. Para los años 2010 al 2014 la normatividad que aplicaba es la “COLGAAP” y para el año 2015 en adelante la normatividad aplicada es IFRS (Normas Internacionales de Información Financiera).

La Asamblea General de Accionistas, de acuerdo con los resultados de la compañía, aprueban la distribución de los resultados, la cual desagregamos en el cuadro en la parte de

07-07.7-F-020-v.8

“Una vez impreso este documento, se considerará **documento no controlado**”.

13/06/2023

Pág. 1



PREAD
Programa de Excelencia
Ambiental Distrital

**Excelencia
Ambiental**

etb.com

“distribución utilidad (pérdida)”. Para el año 2015 en adelante la distribución del resultado se realiza antes del ORI (Otro resultado Integral):

AÑO	UTILIDAD/(PERDIDA) ANTES DE ORI	UTILIDAD/(PERDIDA) A) INTEGRAL	NORMATIVIDAD	DISTRIBUCIÓN UTILIDAD (PERDIDA)				
				OTRAS RESERVAS	APROPiación DIVIDENDOS	APROPiación A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS (RESERVAS FUTUROS PERIODOS)	IMPUESTO A LA RIQUEZA	(MAYOR) MENOR VALOR PERDIDAS ACUMULADAS
2010		121.718.330	COLGAAP	38.084.602	59.619.540	24.064.188		
2011		215.172.350	COLGAAP	42.315.245		172.857.105		
2012		262.830.172	COLGAAP	78.909.508	80.000.000	103.920.664		
2013		169.117.889	COLGAAP	7.700.000	61.708.618	99.709.271		
2014		370.531.188	COLGAAP		67.460.515	241.377.719	61.632.954	
2015			COLGAAP	(27.569.161)	404.203.720	(376.634.559)		
2016	(68.658.731)	(36.538.108)	IFRS					(68.658.731)
2017	(226.263.690)	(254.686.081)	IFRS					(226.263.690)
2018	(149.978.232)	(129.966.173)	IFRS					(149.978.232)
2019	736.917	41.690.378	IFRS					736.917
2020	78.984.309	121.699.670	IFRS					78.984.309
2021	(38.337.563)	(39.604.116)	IFRS					(38.337.563)
2022	138.704.450	169.189.321	IFRS					138.704.450
2023	49.093.354	54.632.729	IFRS					49.093.354
2024 a Junio	(37.205.665)	(45.276.482)	IFRS					(37.205.665)
2024 a Junio	(26.645.054)	(24.449.468)	IFRS					

CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

“2. Informe las razones jurídicas y legales que tiene para no contestar a las proposiciones pese a ser sujetos de control político en virtud del artículo 14 del Decreto ley 1421 de 1993”.

Respuesta:

Resulta oportuno aclarar que ETB atiende de manera completa, oportuna y de fondo, todas y cada una de las Proposiciones que en ejercicio de la función de control político le formula el Concejo de Bogotá. Lo anterior, dando cumplimiento a la normatividad correspondiente a la materia, en especial, el Decreto Ley 1421 de 1993 “*Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá*”, y el Acuerdo Distrital 741 de 2019 “*Por el cual se expide el reglamento interno del Concejo de Bogotá, Distrito Capital*”.

Ahora bien, si su pregunta guarda relación con la no posibilidad de entrega por parte de ETB de información de carácter confidencial, estratégico y del secreto comercial de la compañía, que goza de reserva legal, las razones de naturaleza jurídica y jurisprudencial que fundamentan ello, son las siguientes:

ETB es una sociedad comercial de capital mixto, que ejerce sus actividades comerciales dentro del marco del derecho privado, razón por la cual cuenta con información privada, comercial y estratégica que goza de reserva legal al tenor de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015; el literal c) del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014; y el artículo 61 del Código de Comercio. Por lo tanto, no resulta posible la revelación de ese tipo de información, ya que el conocimiento de la misma por parte de los competidores de ETB situaría a la sociedad en un plano de desigualdad y vulnerabilidad frente a éstos.

Tenemos pues que, en materia de información de carácter privado, confidencial y estratégico, la regla general es la reserva, la cual debe prevalecer, salvo que existan expresas excepciones legales. En esa misma línea se tiene que los numerales 4 y 5 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 disponen como deberes de los administradores los siguientes: “4. *Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad*”, y “5. *Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada*”.

07-07.7-F-020-v.8

“Una vez impreso este documento, se considerará **documento no controlado**”.

13/06/2023

Pág. 2

Así las cosas, la información que no guarda relación con la prestación sustancial y directa del servicio público de telecomunicaciones frente a los usuarios de ésta, es de naturaleza privada y confidencial, y por lo tanto está sometida a la reserva mercantil, pues se refiere a aquellas actividades desarrolladas por ETB que resultan equiparables a las de sus competidores, las cuales son desplegadas dentro de un mercado en el que es necesario competir en igualdad de condiciones¹. Por esa misma razón, la revelación de este tipo de información generaría un perjuicio no sólo a la sociedad como tal, sino a sus accionistas (mayoritarios y minoritarios), cuyo capital ha sido invertido en el patrimonio de la empresa.

Ahora bien, en lo que atañe a la información contractual de ETB, resulta oportuno precisar que de acuerdo con lo previsto en el **artículo 55 de la Ley 1341 de 2009**, según el cual *“Los actos y los contratos, incluidos los relativos a su régimen laboral y las operaciones de crédito de los proveedores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cualquiera que sea su naturaleza, sin importar la composición de su capital, se regirán por las normas del derecho privado”* (se subraya), **ETB cuenta con un régimen de contratación de derecho privado**, conformado por las normas civiles y comerciales y por su **Manual de Contratación**, cuya versión vigente fue adoptada mediante la **Directiva Interna No. 730 del 27 de junio de 2023**, marco en virtud del cual la empresa desarrolla su actividad contractual como **parte contratante**. Así las cosas, se tiene, legalmente, que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (integrado, principalmente, por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes y reglamentarias), no resulta aplicable a ETB, en virtud de la citada Ley 1341 de 2009.

En línea con lo anterior, si bien existe información contractual de ETB de carácter público, legalmente susceptible de entrega, que corresponde a aquella que guarda relación con contratos cuyo objeto es inherente a actividades de tipo administrativo o de funcionamiento y con contrataciones no *core* del negocio, cuya publicación no compromete la confidencialidad o el secreto comercial de ETB, y que se encuentra publicada en el SECOP, y a alguna información de la etapa precontractual de procesos de contratación que se adelantan bajo la modalidad de *“Invitación Pública”* y que se encuentra publicada en la página web de ETB (Términos de Referencia, Adendas, Anexos, Respuestas a Observaciones), por otro lado, si bien es cierto que ETB cuenta con participación accionaria mayoritaria del Distrito Capital de Bogotá, y que es una entidad descentralizada indirecta del mismo, dada su vinculación especial al Sector Administrativo de Coordinación de Hábitat (conforme a lo previsto en el artículo 114 del Acuerdo Distrital 257 de 2006), también lo es que su naturaleza jurídica especial corresponde a la de empresa de servicios públicos mixta, constituida como sociedad comercial por acciones, ejerciendo su actividad comercial conforme a las reglas del derecho privado y a su objeto social, dentro del mercado en competencia del sector de telecomunicaciones, por lo que también la empresa cuenta con información contractual de carácter privado, confidencial, estratégico, del secreto comercial y del *core* del negocio de la compañía, que por ende goza de reserva legal, no siendo susceptible su suministro.

Así las cosas, debemos precisar de acuerdo con lo referido en el párrafo precedente, que la información contractual de carácter público de ETB, es la que se encuentra publicada en el SECOP, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la ley 2195 de 2022 y, en la circular 02 expedida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE el 1

¹ Corte Constitucional: Sentencia T-181 de 2014; y Tribunal Administrativo de Cundinamarca: Sentencia del 17 de agosto de 2016. Expediente 250002341000201601622-00, M.P. Dra. Patricia Afanador Armenta.
07-07-7-F-020-v.8

“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.

de junio de 2022, la cual precisó que, *“el deber de publicidad consagrado en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 no cambia las reglas que en materia de reserva se encuentran consagradas en el ordenamiento jurídico, por lo que, aquellos documentos que tengan esta calidad no deberán ser objeto de publicación en la plataforma SECOP II”*. Así, la información contractual de ETB que no tiene el carácter de confidencial y reservada, es la que se encuentra publicada en el SECOP, y alguna información de la etapa precontractual de procesos de contratación que se adelantan bajo la modalidad de *“Invitación Pública”* y que se encuentra publicada en la página web de ETB (Términos de Referencia, Adendas, Anexos, Respuestas a Observaciones), como ya se indicó.

En línea con lo anterior, resulta oportuno aclarar que a partir del año 2016, se inició la publicación en SECOP I de algunas invitaciones públicas relacionadas con temas no *core* del negocio de ETB, teniendo en cuenta la respuesta de la Procuraduría General de la Nación respecto a consulta elevada por la Gerencia de Atención Legal y Contratos de ETB el 13 de junio de 2016, en la que dicha entidad conceptuó que esta empresa no está obligada a hacer pública información que se encuentre relacionada *“con la actividad comercial que desarrolla en competencia con otros entes bien sean públicos o privados”*.

Ahora bien, en el año 2022, con la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 2195 de 2022, artículo 53, se inició la publicación de algunos documentos de la etapa precontractual, de conformidad con la definición realizada por el área contratante en relación con el proceso de contratación de su competencia.

Así mismo, es importante mencionar que la información de contratos que se publica en SECOP II, es la relacionada con nombre del adjudicatario y su NIT, toda vez que el contrato hace parte de los documentos sometidos a protección legal por reserva, estrategia o confidencialidad de ETB, debido a que contiene cantidades, precio, discriminación, cronograma de entregables, entre otros aspectos, por lo que es información que goza de reserva, para no vulnerar el secreto comercial y las estrategias asociadas a la naturaleza y alcance de cada contrato.

Luego de lo hasta aquí expuesto, es importante efectuar una diferenciación conceptual entre la información considerada de carácter público, y aquella que comporta una connotación privada:

A.) La información y los documentos de carácter público, son aquellos que son de conocimiento de la ciudadanía o del público general, por encontrarse en páginas web, en plataformas públicas o abiertas como las del registro mercantil en Cámaras de Comercio y algunas actividades contractuales en el SECOP y/o que hayan sido divulgadas en cualquier otro medio abierto, y sobre los cuales no existe reserva legal; igualmente, lo son aquéllos que se refieren a la información mínima obligatoria objeto de publicación de los sujetos obligados (Ley 1712 de 2014, artículo 9), a la información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento de las entidades (artículo 11 *ib.*).

Así mismo, es importante señalar que la información reservada, aquella que es protegida y no es obligatorio divulgar abiertamente, no pierde su naturaleza y continúa protegida aunque se entregue a una autoridad pública; por ello, la información solicitada por las autoridades judiciales o administrativas, que, siendo constitucional o legalmente competentes para ello, la solicitan para el debido ejercicio de sus funciones, tienen la obligación de asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de las mismas. Sobre el particular, las Autoridades Judiciales, las de Control y Auditoría (Contraloría General de la República, Contraloría Distrital de Bogotá –esta última para el caso de ETB), las de Inspección

07-07.7-F-020-v.8

13/06/2023

“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.

Pág. 4



PREAD
Programa de Excelencia
Ambiental Distrital

**Excelencia
Ambiental**

y Vigilancia (Superintendencias), las Tributarias (DIAN) y las Regulatorias (Min TIC y CRC), son competentes para solicitar información para el debido ejercicio de sus funciones, respecto a lo cual una vez les sea suministrada para los fines legalmente establecidos, dichas entidades tienen a cargo la obligación de asegurar frente a terceros la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de sus funciones (artículo 61 del Código de Comercio; y artículo 27 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015).

Sobre el particular, es de precisar, en todo caso, que las funciones que sean invocadas por la entidad solicitante, deben acreditar de manera expresa y directa la facultad, atribución o competencia legal que de manera específica le permita acceder a la información de carácter confidencial y reservado que solicita, pues en caso contrario, no resulta procedente su entrega.

Por su parte, los asociados que ostenten titularidad tienen derecho a conocer información sobre libros y papeles de las compañías comerciales en las que participan como socios o accionistas y en las oportunidades previstas en la ley para hacerlo; y también pueden ejercer derecho a conocer información de la empresa quienes cumplen funciones de vigilancia o auditoría. Así, el amparo legal protege la información de la empresa, restringiendo su acceso a propietarios y autoridades competentes (artículo 61 del Código de Comercio; numeral 6 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995).

La jurisprudencia aplicable fue explícita en señalar que para el caso de **ETB**, *“tendrán el carácter de documentos públicos aquellos que estén relacionados con el cumplimiento de la prestación del servicio público que le corresponda por ley, al igual que los que sean producto del ejercicio de prerrogativas propias de una entidad pública”, a contrario sensu*, la restante información es privada, confidencial o estratégica, pues esta es la regla general y aquella la excepción. Por consiguiente, si el objeto de la petición va dirigido a información o documentos relativos a los anteriores supuestos o casos, la misma debe ser entregada al peticionario.

B.) De otra parte, son de carácter reservado los documentos y la información protegida por el secreto comercial e industrial, y los planes estratégicos de las empresas de servicios públicos (numeral 6 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, y literal c) del artículo 18 de la ley 1712 de 2014). Así mismo, la legislación comercial señala que **los libros y documentos del comerciante no podrán ser examinados por personas distintas a los propietarios o personas autorizadas para ello**, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad competente (artículo 61 del Código de Comercio), tal y como se señaló en el literal A) precedente.

En el caso de las empresas de servicios públicos mixtas, la Corte Constitucional en la **Sentencia T-181 de 2014 en la que ETB fue parte**, consideró que *“cuando se trate de documentos de carácter privado, contrario a lo dispuesto para el acceso a los documentos públicos, la regla general es la reserva, en tanto la ley no disponga excepcionalmente su exhibición o la expedición de copias”,* y que son documentos privados que gozan de reserva *“aquellos que sean originados del ejercicio de las funciones que realice la entidad, equiparables a las que realizan los particulares en un mercado donde se necesita que compita en igualdad de condiciones para la eficaz prestación del servicio”*. En consecuencia, si el objeto de la petición va encaminado a la obtención de información o documentos relativos a estos últimos

supuestos o casos, no hay obligación de entregarla al peticionario. Al respecto, y en esa misma línea, la Corte Constitucional mediante sentencia C-951 de 2014², esgrimió lo siguiente:

“El numeral 6 del artículo 24 remite a conceptos establecidos en prácticas comerciales e industriales, los cuales en la definición de secreto empresarial prevista por la Decisión 486 de 14 de septiembre de la Comunidad Andina de Naciones, aplicable en Colombia, en estos términos:

*“Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial **cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.***

(...) La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.”

Como se advierte, el fundamento de la reserva consagrada en el numeral 6 radica en que las hipótesis previstas aluden a información vital para cualquier empresa o comerciante, en tanto manifestaciones de saberes cuya reserva representa protección de su actividad económica o industrial, especialmente, en relación con posibles competidores.

*(...) La Corte coincide con el concepto fiscal, en cuanto **permitir la divulgación de los secretos comerciales e industriales, desconocería un aspecto esencial de la garantía efectiva a estas libertades constitucionales, al beneficiar sin justificación legítima a los competidores, con una información que no les es propia**”*
(NCSFT).

En el mismo sentido, a solicitud de ETB, la Procuraduría General de la Nación conceptuó en relación con ETB, que esta empresa no está obligada a hacer pública información que se encuentre relacionada *“con la actividad comercial que desarrolla en competencia con otros entes bien sean públicos o privados”* (Respuesta a consulta elevada por la Gerencia de Atención Legal y Contratos de ETB el 13 de junio de 2016). Y finalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha rechazado, por improcedentes, algunos recursos de insistencia formulados por peticionarios contra ETB, tal como se tiene de las decisiones del 17 de agosto de 2016³, 9

² El uso y análisis de esta sentencia resulta trascendental, pues a través de ella, la Corte adelantó la Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley número 65 de 2012 Senado y número 227 de 2013 Cámara *“Por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”*, la cual se convertiría en la Ley Estatutaria 1755 de 2015.

³ Tribunal Administrativo de Cundinamarca: Sentencia del 17 de agosto de 2016. Expediente 250002341000201601622-00, M.P. Dra. Patricia Afanador Armenta: *“(…) como se observa, la información relacionada con documentos y libros del comerciante, los protegidos por el secreto comercial o industrial, los referentes a la información financiera y comercial y los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos, tiene carácter reservado. Así las cosas, la Sala considera que la información que está solicitando el peticionario se refiere a información financiera y comercial propia de la actividad comercial de la empresa (...) En efecto, se trata de una información atinente al ejercicio de la prestación del servicio que ella ofrece y que su conocimiento podría ponerla en un plano de desigualdad frente a las demás empresas prestadoras del mismo servicio.”* (SFT)

07-07-7-F-020-v.8

“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.

de marzo de 2017⁴ y 13 de mayo de 2019⁵ y Auto expedido dentro del expediente 25000-23-41-000-2022-01091-00 el 7 de octubre de 2022. Sobre este último aspecto, se tiene que, mediante decisión proferida con ocasión del trámite de insistencia promovido por el Concejal de Bogotá Manuel José Sarmiento Argüello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección 1 – Subsección B – M.P. César Giovanni Chaparro Rincón – Expediente 25000-23-41-000-2022-01091-00, dio la razón a los fundamentos y justificación de la reserva de información invocada por ETB respecto a la no posibilidad de entrega de información confidencial, privada y estratégica de la empresa, así:

*“Pues bien, de conformidad con las normas y la jurisprudencia transcrita, estima la Sala que **la vicepresidente de asuntos corporativos y estrategia de E.T.B. S.A. E.S.P. acertó al negar al señor Manuel José Sarmiento Argüello la información relativa a los planes estratégicos de dicha Entidad, para implementar y expandir su red de fibra óptica en toda la ciudad, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 24, numeral 6° y 18 literal c) de la Ley 1712 de 2014**”. (...) **“También acertó al negar la información solicitada con fundamento en el artículo 61 del C.Co. que dispone: (...)”** (...) **“En ese orden de ideas, la Sala procederá a declarar bien denegada la información solicitada por el concejal Manuel José Sarmiento Argüelles en los puntos 1 y 6 del derecho de petición”** (NSFT).*

Adicionalmente, considerando que ETB es una sociedad legalmente constituida, que participa de un mercado libre, abierto y competido, **sus estrategias y criterios de negocios son igualmente protegidos, de la misma manera como se protegen los secretos industriales y comerciales de otras empresas**, para impedir que, con su acceso, se pueda afectar el ejercicio de las libertades económicas. Al proteger la información, se protege la actividad productiva, industrial o comercial, referida a la naturaleza, las características o finalidades de los productos o servicios, los métodos, formas o procesos de distribución o comercialización de bienes o servicios y al manejo gerencial de la sociedad. El secreto goza de reserva y se traduce en información clasificada para otorgar al titular una ventaja en el mercado que le permite diferenciarse de sus competidores y ser más eficiente, con el fin de ser competitivo en el mercado.

Aunado a lo anterior, es importante referir que ETB debe cumplir obligaciones de reportes de información a autoridades regulatorias, como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, actividades que se realizan de acuerdo con lo previsto en la regulación de telecomunicaciones vigente, y por tanto, ese tipo de información no sería susceptible de entrega previa a otra autoridad pública, pues la misma se reporta con ciertas periodicidades y fechas de corte, y luego de los análisis y procesos de consolidación correspondientes que llevan a cabo dichas entidades respecto a la información que les proveen las empresas del Sector TIC, como ETB, igualmente realizan las publicaciones de la misma, también con ciertas periodicidades y fechas de corte, siendo ésta la información de carácter público de acceso a terceros.

⁴ Sentencia del 9 de marzo de 2017, Expediente 25000234100020170028600, M.P. Dr. Felipe Alirio Solarte Maya: “(...) De la normativa antes mencionada se tiene que la documentación e información pedida es reservada por corresponder a la esfera privada de la empresa. Por lo antes mencionado, se declarará bien denegada la petición (...).”

⁵ Sección Primera – Subsección “A”: Sentencia del 13 de mayo de 2019, Proceso No. 25000-23-41-000-2019-00260-00. M.P. Dra. Claudia Elizabeth Lozzi Moreno: “(...) Para resolver, la Sala pone de presente que la entidad ante quien se elevó la petición y consecuente insistencia, esto es, la **Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. – ETB. S.A. ESP.**, es una entidad descentralizada constituida como sociedad comercial por acciones y (...) aunque si bien, es una entidad pública, para el cumplimiento de su objeto social, es sometida a las reglas del derecho privado. (...) por la naturaleza misma de este tipo de entidades debe equiparárselas y colocarlas en igual de condiciones con las empresas privadas, en tanto, son con estas con quienes compete en el mercado, por lo cual, no es procedente el recurso de insistencia invocado de conformidad con lo indicado por la transcrita Sentencia C-951 de 2014 M.P. Martha Victoria Sánchez Méndez.” (SFT)

Ahora bien, teniendo en cuenta su pregunta, y en cuanto al ejercicio de la función de control político, debemos indicar lo siguiente:

Los miembros de las corporaciones públicas de elección popular (Congresistas, Diputados, Concejales y Ediles), pueden solicitar información para el ejercicio de la función de control político, pero tal derecho no es ilimitado ni absoluto. Esto se encuentra reafirmado por la Corte Constitucional, que mediante la **Sentencia T-181 de 2014**, señaló: “De lo anterior, considera la Sala que la función de control político que invocó la concejala para hacer inoponible la reserva de los documentos privados y en efecto lograr acceder a la información contenida en ellos, **no se enmarca dentro de los fines constitucionales enunciados anteriormente, puesto que, no es el caso de un control fiscal que ampara un fin tributario, ni un control que persiga un fin judicial, ni mucho menos el ejercicio de un control de inspección, vigilancia e intervención propio del cumplimiento de las funciones de las Superintendencias frente a las empresas que prestan servicios públicos.**” (SFT).

De igual manera, la jurisprudencia ha señalado que se puede ejercer el control político a través de la información que es de carácter público, así como en virtud de los informes que la sociedad comercial presenta al público y a las autoridades que las vigilan, inspeccionan y auditan, y en tal sentido, no se vulnera el ejercicio de su derecho: “Así las cosas, aun cuando no se acceda a la entrega de la información solicitada (...) ello no implica que no pueda ejercer el control político pues tiene a su disposición los informes que presenta toda sociedad comercial al público (...)”⁶ (SFT)

Así mismo, de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección 1 – Subsección B – M.P. César Giovanni Chaparro Rincón – Expediente 25000-23-41-000-2022-01091-00, ya citada, se tiene que el Tribunal considera lo siguiente: “Al respecto, la Sala advierte que, **si bien en el presente asunto el concejal Manuel José Sarmiento Argüelles afirma que solicita la información en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control político sobre E.T.B. S.A. E.S.P., dichas funciones no se enmarcan dentro de las excepciones previstas en la norma referida, en tanto que no se evidencia que la información solicitada en el marco del control político persiga un fin tributario, judicial, ni de inspección o vigilancia. De esta manera, no es posible el acceso a dicha información**” (NSFT).

Adicionalmente, en otra decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección 1 – Subsección A – M.P. Luis Manuel Lasso Lozano – Expediente 250002341000202201588-00, con ocasión del trámite de insistencia promovido por el Concejal de Bogotá Diego Andrés Cancino Martínez, el mismo Tribunal expuso: “La Sala no desconoce que la información fue solicitada por un Concejal **en ejercicio de su facultad de control político** (artículos 27 de la Ley 1437 de 2011 y 52 del Acuerdo 741 de 2019 “Por el cual se expide el reglamento interno del Concejo de Bogotá, Distrito Capital”), **sin embargo los alcances de dicha facultad deben ser interpretados en consonancia con la jurisprudencia constitucional ya referida. Conforme a lo anterior, se declarará bien denegada la entrega de la información solicitada**” (NSFT).

De igual forma, de manera reciente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 8 de mayo de 2024, Expediente 2500 0234 1000 2024 00744 00, dentro del trámite de insistencia presentado por el Concejal de Bogotá Daniel Felipe Briceño Montes frente a ETB, consideró lo siguiente:

⁶ Tribunal Administrativo de Cundinamarca: Sentencia del 17 de agosto de 2016. Expediente 250002341000201601622-00, M.P. Dra. Patricia Afanador Armenta.
07-07.7-F-020-v.8

“Una vez impreso este documento, se considerará **documento no controlado**”.

“(…) se respalda la oposición de la ETB, en cuanto a que parte de su contratación, la privada, debe protegerse frente al conocimiento que de ella puedan obtener sus competidores; y es así, porque sería la que relaciona con productos de su objeto social, en ámbitos comerciales, técnicos, de negocios, empresariales, de estructuración financiera, de secretos profesionales y tecnológicos, que tienen fuerte restricción y protección de reserva, que escapa a cualquier persona y frente a la cual no procede siquiera la que invoca el peticionario del artículo 27, CPACA, pues la función de control político no alcanza para equipararla a las de las “autoridades judiciales, legislativas, ni a las autoridades administrativas que siendo constitucional o legalmente competentes para ello” que sí posibilita dicha norma jurídica; es decir, una actividad de control político no se incluye dentro de las que ejerce una autoridad administrativa, y es claro que un concejal tampoco es autoridad judicial ni legislativa” (NSFT).

Por su parte, de manera reciente, se tiene que en sentencia proferida por el Juzgado Veinte Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá el 25 de junio de 2024, al resolver la impugnación interpuesta por el Concejal de Bogotá Angelo Schiavenato Rivadeneria, el despacho consideró lo siguiente:

“Tampoco es de recibo que el accionante, en su condición de concejal municipal, aprecie su condición de “autoridad administrativa”, como puente de acceso para obtener información confidencial, cuando la realidad supone a que su cargo no obedece ni siquiera a la condición de empleado público, según lo establece el artículo 312 de la Carta Magna.

En ese escenario, le asiste razón a la Juez de primera instancia en determinar la inexistencia de orden administrativa, debidamente argumentada, que permita inferir la necesidad de aplicar la inoponibilidad de la reserva legal, cuando tales revelaciones de información solo concurren de manera excepcionalísima al poderse poner en peligro la intimidad empresarial de la propia demandada, inclusive de terceros. Más aun cuando el accionante solo menciona la existencia del convenio administrativo, y no la intención de vigilancia por parte del Concejo de Bogotá, cómo cuerpo colegiado, siendo completamente impróspero considerar que su condición de concejal permite el acceso al secreto profesional de la demandada, sin limitación alguna” (NSFT).

En síntesis, la información confidencial que goza de reserva legal no es susceptible de entrega, so pretexto de control político, pues este no es absoluto ni ilimitado, sino que debe observar las disposiciones legales que además han sido consolidadas por la jurisprudencia relativa a la protección de la información objeto de reserva legal. Así las cosas, tal y como lo ha considerado la Corte Constitucional, dicho control se garantiza y puede ser ejercido por parte de los miembros de las corporaciones públicas, a través de la información que es de conocimiento público y que está a su alcance para tal fin, y como lo señala el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la función de control político no persigue un fin tributario, judicial, ni de inspección y vigilancia que le permita acceder a ese tipo de información confidencial y reservada.

“3. A la fecha cuántas conexiones tiene por los servicios prestados, en número sin identificación o georreferenciación y cuántas de ellas son por fibra óptica”.

Respuesta:

07-07.7-F-020-v.8

“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.

13/06/2023

Pág. 9



PREAD
Programa de Excelencia
Ambiental Distrital

**Excelencia
Ambiental**

A continuación, se presenta la información solicitada:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
TOTAL COMPAÑÍA	759.000
DUO LÍNEA BÁSICA + BANDA ANCHA	400.831
LÍNEA BÁSICA	145.191
BANDA ANCHA	124.932
TRIO	83.257
DUO BANDA ANCHA + TELEVISIÓN	4.206
TELEVISIÓN	583
FIBRA	652.355
BANDA ANCHA	113.435
DUO LÍNEA BÁSICA + BANDA ANCHA	357.401
LÍNEA BÁSICA	96.282
TRIO	81.124
DUO BANDA ANCHA + TELEVISIÓN	4.113
MÓVIL	305.090
POSPAGO	195.777
PREPAGO	109.313

* Información corresponde a total compañía.

* Información al cierre de Junio 2024.

“4. Informe cuántas quejas recibe por año, desde el año 2010 y hasta la fecha”.

Respuesta:

El Título III de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio señala que los operadores deben conservar información sobre las peticiones, quejas/reclamos y recursos presentados por los usuarios por un plazo de tres (3) años. Así las cosas, a continuación, se relaciona la información desde el año 2018:

Año 2018: 452.161
Año 2019: 287.081
Año 2020: 291.233
Año 2021: 193.246
Año 2022: 156.356
Año 2023: 150.816
Año 2024: 109.468 (Con corte al 28 de agosto de 2024)

“5. Informe del total de quejas recibidas, cuántas han sido resueltas en términos”.

Respuesta:

El 99.98% de las quejas interpuestas por Clientes ante ETB del segmento hogares, Mipymes y móviles (personas) se resuelven en términos, esto incluye las diferentes tipologías como, facturación, calidad y cobertura etc. Lo que se encuentra por fuera de este porcentaje se genera en su mayoría por el impacto asociado a vandalismo y hurto de infraestructura de red ETB, donde las reparaciones técnicas de tramos afectados toman mayor tiempo.

“6. Entregue copia de la escala salarial y de honorarios para la empresa vigente para los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024”.

Respuesta:

Por su importante contenido estratégico y comercial, las políticas salariales comportan un activo de información que goza de reserva. Sin embargo, en honor a la transparencia que le corresponde al tema, es nuestro interés informar que la planta de personal de la compañía cuenta con un esquema salarial derivado, mayoritariamente de las obligaciones de orden convencional extensivas al personal de régimen salarial ordinario. Estas prescripciones extralegales parten de un esquema salarial que prevé categorías y niveles que posibilitan distinciones salariales para cada cargo, ello en favor de otras prebendas convencionales, y mismas con las cuales, el costo de las asignaciones salariales así dispuestas puede representar 2,2 veces el valor nominal del sueldo asignado a cada cargo, sin perjuicio del reconocimiento adicional de beneficios asistenciales, médicos, educativos o recreativos. Mismo personal respecto del cual en la actualidad existe una garantía de estabilidad reforzada denominada fuero circunstancial, con ocasión del inicio de las negociaciones colectivas entre ETB y sus sindicatos.

De otra parte, y en el marco de la regulación de índole particular que posibilita las previsiones antes descritas, aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, en concordancia con el artículo 55 Ley 1341 de 2009 y la sentencia C-306 de 2019 y el Concepto 003301 de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública, desde hace más de 20 años en ETB se cuenta con el régimen salarial integral, desprovisto de la aplicabilidad de prestaciones legales y de las prebendas convencionales. En la población que cuenta con este régimen se tiene plena equidad salarial derivada de la identidad de asignación para cargos de igual denominación, perfil y responsabilidades, siendo del caso señalar que conforme los más recientes estudios salariales realizados sobre las asignaciones de la compañía, las correspondientes al personal de alta gerencia cuentan con una importante brecha salarial respecto a los valores y prácticas del mercado, ubicándose en percentiles bajos para su competitividad; por el contrario, tratándose de asignaciones sujetas a prebendas de orden convencional, tal como se indicó, el costo de estas puede representar 2,2 veces de su asignación nominal, incluso, sin considerar beneficios convencionales de orden recreativo, médico y educativo, lo que los ubica muy por encima del costo legal de las obligaciones a cargo de un empleador. Siendo así, que, para el año 2023 dichas obligaciones convencionales alcanzaron un valor de \$80 mil millones.

Es de anotar que, al compararnos con el mercado, ETB sobrepasa el promedio (11% promedio mercado) de los costos de personal sobre los costos totales de la compañía (26% promedio ETB).



Lo anterior, no obstante, el hecho que se ha procurado la sostenibilidad de los costos laborales, siendo así que desde inicio del año 2020 a la actualidad se ha optimizado la planta mediante una reducción cercana al 16%.

En todo caso, la información relacionada con salarios de los trabajadores de ETB NO se encuentra publicada, y por lo tanto, es información privada, comercial y estratégica que goza de reserva legal al tenor de lo dispuesto en los numerales 3 y 6 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015; el literal c) del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014; y el artículo 61 del Código de Comercio. en consecuencia, no es procedente la revelación de ese tipo de información, ya que el conocimiento de esta por parte de los competidores de ETB situaría a la sociedad en un plano de desigualdad y vulnerabilidad frente a éstos.

De otro lado, el concepto de honorarios corresponde a la prestación de servicios especializados por una empresa o persona natural, de manera independiente, los cuales no tienen ningún vínculo ni subordinación laboral. Los honorarios se registran contablemente en la cuenta de costos y gastos recurrentes de acuerdo con las normas NIIF aplicable a ETB.

Al cierre del 31 de diciembre de 2023 este concepto se distribuyó de la siguiente manera:

- Un 72% correspondiente a las amortizaciones de los pagos de las comisiones de ventas a los canales y a través del call center, por la adquisición de nuevos clientes, aplicando lo definido en la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”.
- Un 13% son gastos asociados a la comercialización y posicionamiento de marca, estrategias comerciales y de mercadeo que permiten potencializar las ventas en clientes nuevos, fidelizar y rentabilizar los clientes actuales.
- El 15% restante corresponde a los servicios prestados por la revisoría fiscal, los honorarios de miembros de Junta Directiva, la gestión de cobro de cartera de clientes, consulta de datos de clientes en la CIFIN, asesorías legales y financieras, gastos de administración de la página Web, redes sociales y pagos a apoderados judiciales por concepto de procesos legales y tributarios.

Los costos de honorarios de reventa se incluyeron en el rubro de honorarios hasta el 31 de diciembre de 2021. Reventa son soluciones integrales que ETB ofrece a sus clientes a través de lo que ha denominado STI (Soluciones Tecnológicas Integrales) proceso a través del cual se identifican, diseñan e implementan soluciones de acuerdo con las necesidades de cliente final. Pueden ser prestación de servicios o entrega de bienes, los cuales se soportan en procesos de contratación tipo aliado – proveedor, amparados en manual de contratación.

“7. Informe cuántos empleos tiene a la fecha en planta y discrimine por tipo de empleo”.

Respuesta:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, los trabajadores de la ETB S.A. E.S.P. se rigen en sus relaciones laborales por el derecho privado, es decir, por el Código Sustantivo del Trabajo, circunstancia que se encuentra en concordancia con lo expuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 55 Ley 1341 de 2009, la sentencia C-306 de 2019 y el Concepto 003301 de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Por lo anterior, la relación de contratos de trabajo vigentes a 31 de diciembre de 2023 (última información publicada), donde se señala cuantos de ellos tienen régimen salarial ordinario (Convencionados) y cuantos de ellos tienen régimen salarial integral (Integralizados) es la siguiente:

No. Trabajadores	dic-23
Convencionados	1.616
Integralizados	499
Total	2.115

“8. Informe si tiene demandas por prestaciones laborales y de tenerlas, a cuánto ascienden a la fecha”.

Respuesta:

Actualmente, la entidad se encuentra vinculada en 22 procesos laborales que tienen relación con reclamación de prestaciones sociales, en los cuales la pretensión a la fecha demanda ascienden a \$4.133.623.056 pesos, los cuales se discriminan de la siguiente forma:

9 litigios tienen relación con trabajadores o extrabajadores de ETB cuyas pretensiones al momento de presentar la demanda ascienden a \$2.708.868.000 pesos. **Estas reclamaciones surgen de relaciones laborales que terminaron durante los años 2005 al 2019.**

13 litigios tienen relación con colaboradores de terceros donde el demandado principal es un contratista y vinculan a ETB alegando solidaridad cuyas pretensiones al momento de la demanda ascienden a \$1.424.755.056 pesos. **Estas reclamaciones surgen de trabajadores de nuestros aliados (contratistas) que terminaron sus relaciones durante los años 2015 al 2022.**

“9. Informe cuántos litigios tiene abiertos con reclamaciones en dinero y señale la cuantía”.

Respuesta:

La entidad actualmente gestiona 794 litigios con reclamaciones relacionadas con temas dinerarios, entre las que encontramos, demandas ejecutivas, administrativas, civiles, laborales y arbitrales, cuyas pretensiones al momento de la demanda ascendían a \$1.400.878.102.031 pesos y se encuentran divididos de la siguiente forma:

162 litigios en calidad de demandado cuyas pretensiones al momento de la demanda ascendían a \$382.303.397.105 pesos, estos procesos fueron instaurados desde el año 2004 hasta el año 2024, distribuidos así:

51 demandas administrativas
107 demandas laborales
4 demandas civil

Año	Número procesos
2004	1
2010	1
2011	2
2012	1
2013	1
2014	2
2015	5
2016	8
2017	15
2018	12
2019	35
2020	18
2021	32
2022	16
2023	11
2024	2
Total	162

623 litigios en calidad de demandante cuyas pretensiones al momento de la demanda ascendían a \$1.018.674.704.926 pesos, adelantados desde el año 2000 hasta el 2024, distribuidos así:

458 demandas administrativas
118 demandas civiles
46 demandas laborales
1 proceso arbitral

Año	Número procesos
2000	4
2001	5
2002	1
2003	1
2004	2
2005	8
2006	2
2007	5
2008	3
2009	7
2010	10
2011	4
2012	5
2013	10
2014	13
2015	44
2016	28
2017	29
2018	61
2019	70
2020	74
2021	49
2022	70
2023	67
2024	51
Total	623

En los anteriores términos se atiende de manera completa, oportunamente y de fondo su solicitud.

Cordialmente,



LAURA CATALINA CARDONA CRUZ
Secretaria General

Proyectó: Javier David Jiménez Solanilla – - Profesional Especializado - Dirección de Prospectiva y Sostenibilidad